JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., catorce de marzo de dos mil veintitrés.

Acción de tutela No. 25377408900120230002900.

Resuelve el juzgado la impugnación a que fue sometida el fallo de tutela del 8 de febrero del año en curso, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de la Calera – Cundinamarca, dentro de la acción de tutela promovida por la señora Deicy Pachón Salas, contra La Unión Temporal Servicios Integrales y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca Sede Operativa La Calera –Sierra la Calera-, previo los siguientes;

1. ANTECEDENTES

1.1. Pretende la accionante el amparo de su derecho fundamental de petición en conexidad con el derecho al trabajo, movilidad y buen nombre, en consecuencia, solicitó que se ordene a la accionada dar respuesta a la petición radicada el 22 de febrero de 2022.

1.2. Como aspectos relevantes señaló en síntesis que, el pasado 22 de febrero de 2022 elevó derecho de petición ante la entidad accionada, la cual le asignó el radicado 2022018739, solicitando la actualización de la información que aparece registra en el RUNT respecto del vehículo de su propiedad de placas UPO -338, ya que según lo informado por el Ministerio de Transporte mediante radicado MT 20214020155473, los organismos de tránsito deben adelantar dicha gestión respecto de los vehículos allí citados, por deficiencias en la matrícula, dentro de ese listado se encuentra incluido el aludido automotor.

Refirió que, el 3 de marzo de 2022 recibió respuesta por parte de la accionada, en el cual le solicita la aportación de unos documentos que ellos ya poseen en la carpeta del vehículo, por lo cual no existe impedimento alguno para que realicen la actualización solicitada conforme las instrucciones impartidas por el Ministerio de Transporte.

2. EL FALLO IMPUGNADO

La Juez de primera instancia, declaró la improcedencia del amparo deprecado, por inexistencia de vulneración a los derechos invocados por la actora, pues si bien elevó un derecho de petición el 22 de febrero de 2022, solicitando la actualización de la información del vehículo de su propiedad de placas UPO - 338 en la plataforma RUNT, lo cierto es que, la misma fue

debidamente atendida el 3 de marzo de 2022 mediante oficio CE-2022622205, en el que de manera clara y enfática se le solicitó a la actora aportar “*la declaración de importación No. 07229290050460 de abril 21 de 2006*”, y se informó que dicho documento podría ser solicitado ante la DIAN, con fines de acceder a lo solicitado.

No obstante, la actora dejó transcurrir más de diez (10) meses desde la emisión de la respuesta, para acudir a esta acción de tutela, sin demostrar siquiera sumariamente que intentó conseguir el documento que le fue requerido, así como tampoco informó las razones por las cuales se ha sustraído de su cumplimiento, a pesar de ser la principal interesada en que se actualice la información del vehículo de su propiedad ante la base de datos del RUNT.

En ese sentido, no se colige acción u omisión alguna atribuible a la entidad accionada que pueda ser considerada como violatoria a los derechos fundamentales de la actora. Siendo entonces incoa cualquier orden que se imparta al respecto.

3. LA IMPUGNACIÓN

Dentro del término legal, la accionante impugnó el fallo de tutela, oportunidad en la que sostuvo que, contrario a lo afirmado por el juzgado *A quo* si existe una afectación directa a sus derechos fundamentales, dado que el vehículo dejó de ser usado en la empresa donde estaba afiliado porque la carga no es la correcta según lo especificado en el RUNT.

Adujo que no tiene acceso al registro de importación, pues la misma obra en la oficina de tránsito de la calera donde se encuentra matriculado el automotor, por lo cual, elevó la solicitud de corrección de los datos del vehículo a fin de obtener una solución pronta, ya que tiene plazo hasta el 28 de febrero del año en curso, para efectuar los correctivos de legalización de la matrícula.

Señaló que, en el año 2006 cuando se matriculó el vehículo se hizo de forma correcta y en 2008 de acuerdo a la resolución que indicaba que solo los vehículos de 10.5 toneladas debían poseer el MT o cupo, por lo que su vehículo se encuentra exento de ese requisito.

4. CONSIDERACIONES

4.1. La acción de tutela es un mecanismo eminentemente excepcional y residual idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se

disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

4.2 El presente trámite se inició principalmente por la presunta vulneración al derecho de petición. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompasa con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al párrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020¹, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la

¹ Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción (...).

Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que, a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones volvió a ser de 15 días.

4.3. Aplicando las anteriores referencias jurisprudenciales al caso que se analiza, prontamente se advierte la improcedencia de la acción de amparo, tal como lo anotó el *a quo*, por las razones que a continuación se expresan:

En el presente asunto, la señora DEICY PACHÓN acude a la acción de tutela solicitando la protección constitucional de su derecho fundamental de petición, presuntamente conculcado por La Unión Temporal de Servicios Integrales y Especializados de Tránsito y Transporte de Cundinamarca Sede Operativa La Calera, con ocasión a la respuesta dada a su petición el 3 de marzo de 2022, pues considera que el requisito no le es exigible dado que reposa en los archivos de tránsito de la Calera, y por tanto, deberá acceder favorablemente a lo solicitado, esto es, la actualización de la información que registra en el RUNT el vehículo de su propiedad de placas UPO –338.

En ese sentido al revisar la respuesta ofrecida por la entidad convocada, se extrae claramente que la misma no puede acceder a lo solicitado hasta tanto se allegue por parte de la actora copia de la declaración de importación No. 07229290050460 de abril 21 del 2006, que deberá ser solicitada ante la DIAN, quien es la entidad competente, lo cual desvirtúa lo manifestado por la actora en su escrito de tutela e impugnación al indicar que dicho documento obra en la carpeta de la autoridad de tránsito.

Además, explicó que dicho documento es necesario para evidenciar el peso bruto vehicular exacto del rodante y ficha técnica de homologación de chasis, por tanto, una vez obre la aludida documentación se resolverá de fondo su solicitud.

Significa lo anterior que, la administración se encuentra pendiente del cumplimiento de una carga por parte de la actora para poder emitir una respuesta de fondo, actuación que se ajusta a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, so pena de tener por desistida la petición. Valga precisar que si la interesada quería valerse del documento que, según aduce, se halla en la oficina de tránsito de la Calera, debió antes de acudir a esta acción, , poner de presente tal manifestación a la entidad accionada, para que ésta efectuara el pronunciamiento que estimase procedente, y no guardar silencio por más de 10 meses, para acudir a la tutela.

Ciertamente, tal y como lo afirmó el *A quo*, la promotora acude a la acción de tutela sin haber acreditado si quiera sumariamente, haber intentado obtener la documentación que le fue requerida o en su defecto, exponer las razones que le impiden acceder a la misma o que justifiquen su inactividad por un lapso tan prolongado, teniendo en cuenta que la respuesta censurada fue emitida el 3 de marzo de 2022 y la presente acción se interpuso solo hasta el 26 de enero de 2023, es decir, dejó transcurrir diez (10) meses entre uno y otro acto, lo que de suyo descarta la posibilidad de que la actora se encuentre ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable.

5. CONCLUSIÓN

Por lo antes expuesto, se confirmará la decisión de primera instancia, ya que no se encuentra acreditada ninguna conducta u omisión atribuible a la entidad convocada que ponga en riesgo o pueda ser considerada como violatoria a los derechos fundamentales de la promotora.

Contrario sensu, se establece que la misma se sustrajo del cumplimiento de lo requerido por la convocada, carga que no puede ser trasladada a la administración como lo sugiere la actora, ya que es el interesado quien debe adelantar las actuaciones que le sean requeridas, a fin de obtener el resultado esperado, a menos que, exista alguna circunstancia excepcional que le imposibilite la consecución de los mismos, aspecto que en todo caso no aconteció.

Y como si fuera poco, la presente acción de amparo desconoce el principio de inmediatez, ya que la misma se interpuso en un lapso superior a los seis (6) meses, término que adoptó la Corte Suprema, Sala de Casación Civil como razonableⁱ, desde que tuvo conocimiento de la respuesta dada a su petición, sin que medie razón o justificación alguna de dicha tardanza.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

6.1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de febrero del año en curso, por el Juzgado Promiscuo Municipal de la Calera – Cundinamarca, dentro de la acción de tutela del epígrafe y por las razones plasmadas en la parte considerativa de esta providencia.

6.2. NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. REMÍTANSE las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

L.S.S.

ⁱ Cfr. C. S. J., Sent. Tut., 2-07-07, exp. No. 050012203000-2007-00188-01.

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **900567cf67251d445a8e9f03ee27a1f51855fcb25ce99420ef95948b2**

Documento generado en 14/03/2023 03:45:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>